

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 1 .- .-

NOMENCLATURA	: 1. [40] Sentencia
JUZGADO	: 29º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-8272-2021
CARATULADO	: ECAVAL LTDA./CONSORCIO FCC-FA
LIMITADA	

Santiago, veintiséis de Diciembre de dos mil veintidós

VISTOS:

Carlos Eduardo Lagos Herrera, abogado, domiciliado en El Regidor N° 66, piso 14, Las Condes, en representación de Sociedad Comercial y de Transportes Ecaval Limitada, sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por José Antonio Castro Silva, ambos domiciliados para estos efectos en Cerro Santa Lucía N° 9800, Quilicura, deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra de la sociedad Consorcio FCC Construcciones Ferroviales Agroman Limitada, sociedad de giro de su denominación, representada legalmente por Enrique Marijuan Castro, ignora profesión u oficio, Carlos Loscertales Fayren, español, ingeniero, y José Luis Sánchez Becerra, ignora profesión u oficio, todos domiciliados en avda. Vitacura N° 2771, oficina 403, Las Condes.

Expone que Ecaval cuenta con una plata de áridos, ubicada en Santa Isabel 8-916, Lampa, cuyo objeto es la venta y producción de áridos para rellenos, obras viales o nivelación de terrenos. En ese contexto, uno de los principales compradores de áridos de Ecaval sería la empresa Consorcio FCC Construcciones Ferroviales Agroman Limitada, en adelante FCC.

Indica que entre Ecaval y FCC se forjó una muy buena relación comercial, la que se desarrolló sin inconvenientes durante un determinado período de tiempo. Sin embargo, durante el año 2017 empezaron a surgir inconvenientes. Al respecto, señala que la demandada comenzó a manifestar que existían supuestas discrepancias entre el volumen de los materiales (áridos) que Ecaval entregaba y que constaba en las guías de despacho, y la cantidad de materiales que efectivamente recibía FCC, circunstancia que nunca habría constado a su representada

Relata que Fuad Kassis Satorres, jefe de producción de FCC, con fecha 1 de junio de 2017, envía un correo a Braulio Cordero, jefe de gestión de la división áridos de la sociedad demandante, indicándole que por motivo de presuntas diferencias entre las guías de despacho suministradas y el real material entregado por los transportistas, se procedería al cese de los pagos de todas aquellas guías de despacho que no se encontraran firmadas por los supervisores o personal a cargo de la obra.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GGKBXCPJXY

«RIT»

Foja: 1

Agrega que frente a esto, Braulio Cordero informó al sr. Kassis Satorres que una vez el material sale de la planta de áridos, pasa a ser de exclusiva responsabilidad de las empresas transportistas y de los conductores llevar ese material íntegramente a su destino, más aun teniendo a la vista que las respectivas guías de despacho emitidas reflejan y dan cuenta de la cantidad exacta de los áridos entregados por Ecaval a los transportistas.

Prosigue contando que siendo la demandada uno de sus principales compradores, y teniendo a la vista el principio de buena fe que rige los vínculos de naturaleza contractual, su representada procedió a modificar su sistema de carga de camiones y de guías de despacho, incorporando a la cadena de dicho proceso una fase consistente en que el conductor que volviera a la planta de áridos a cargar nuevamente material para FCC, debía presentar a personal de Ecaval copia de la guía recepcionada por la persona de turno encargada de recibir el material en los diferentes puntos que FCC indicara. Adicionalmente, se elaboró un listado de camiones autorizados por FCC para retirar áridos desde la planta de Ecaval.

Acusa que sin perjuicio de lo anterior, la parte compradora y demandada luego de haber efectuado esta solicitud de perfeccionamiento de determinados detalles y/o condiciones relativos al proceso de entrega de materiales suministrados por su representada, habría pretendido en realidad establecer de forma totalmente arbitraria, improcedente y contraria a la buena fe contractual – según califica- una exigencia adicional, consistente en que Ecaval se hiciera civilmente responsable por el accionar de terceros, por cuanto resulta imposible que su representada supiera o pudiera saber lo que ocurre fuera de sus instalaciones, donde no tenía ninguna posibilidad de control e ingerencia.

Señala que en este contexto es que con fecha 9 de agosto de 2018 Ecaval emitió la factura electrónica N° 9919, por un valor total de \$39.848.340, con ocasión de los saldos pendientes correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 2017, cuyo pago no había sido efectuado por FCC fundado en las supuestas discrepancias de material antes referidas. Sin embargo, pese al recto proceder de su representada, y sin perjuicio de haber aceptado las condiciones adicionales requeridas por la contraria, denuncia que hasta la fecha ésta se niega a pagar la suma antes indicada, insistiendo en atribuir responsabilidad a Ecaval por las supuestas diferencias que habrían tenido lugar en operaciones anteriores.

Insiste en que no es posible atribuir válidamente responsabilidad civil a Ecaval respecto a lo que suceda con los materiales áridos durante su traslado a destino, toda vez que dicha etapa se encuentra a cargo y es de exclusiva responsabilidad de las respectivas empresas transportistas, debiendo agregarse que el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a su representada, radica en poner la cantidad de materiales pactados a disposición del transportista al interior de sus dependencias, no siendo posible atribuir responsabilidad a su respecto por lo que suceda en dicho proceso de suministro de materiales fuera de sus instalaciones.

Destaca que en el caso de marras fue la propia FCC quien enviaba a un conductor de su empresa o de una empresa de transporte que ellos mismos



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GGKBXCPJXY

«RIT»

Foja: 1

contrataban para retirar los áridos, pesando sobre éstos la responsabilidad de llevar los áridos de manera íntegra a su lugar de destino.

Concluye que si la cantidad de áridos que salió de la planta de Ecaval y la que llegó a la planta de FCC resultó diversa, entonces FCC, la respectiva empresa transportista o la persona del conductor, serían responsables de dicha diferencia y no Ecaval, que entregó específicamente la cantidad de áridos descrita en cada una de sus guías, las que fueron recepcionadas conforme, dando así cumplimiento exacto, íntegro y oportuno a todas las obligaciones que le correspondían, según apunta, no habiendo justificación para que FCC se niegue a efectuar el pago de los saldos cuyo pago adeuda a su representada, incumpliendo expresa y sustancialmente la obligación actualmente exigible que mantiene respecto de ella, ocasionando a Ecaval una serie de perjuicios que necesariamente han de ser reparados.

Invoca el estatuto contractual de los artículos 1545 y siguientes del Código Civil.

En cuanto a los daños y comenzando por el emergente, plantea que se traduce en el monto de la factura electrónica N° 9919, emitida por Ecaval con fecha 9 de agosto de 2018, esto es, la suma de \$39.848.340, por concepto de los saldos de precio pendientes de pago por FCC, fundados en los materiales que le fueron suministrados, correspondientes a los meses de mayo, junio y julio del año 2017, que estima debe ser indemnizado debidamente reajustado a la fecha efectiva del pago, más intereses y costas.

En relación al lucro cesante, indica que en el caso de marras su representada a propósito del conflicto que ha tenido lugar con la sociedad demandada, ha dejado de percibir una serie de utilidades y ganancias relacionadas con el desarrollo de su giro, por cuanto a partir de la ocurrencia de los hechos descritos a lo largo de la presente demanda, se habría evidenciado una clara disminución en el número y entidad de las operaciones comerciales que anual y mensualmente exhibía, situación que se habría mantenido hasta la fecha de ingreso de esta presentación, merma que cifra en \$150.000.000.

Por último, esgrime que la situación a que actualmente se encuentra públicamente expuesta su representada, a saber, que en su calidad de sociedad comercial con amplia trayectoria en su rubro, sea objeto de imputaciones por parte de FCC tendientes a señalar que Ecaval se caracteriza por ser una empresa desprolija y gravemente negligente en el desarrollo de las operaciones comerciales en las que se encuentra involucrada, o bien, que derechamente incurre en actos que develan un ánimo defraudador respecto de sus compradores, no respetando las cantidades o volúmenes pactados de los materiales vendidos y/o suministrados, constituyen un severo atentado a su reputación, a través de las cuales además sólo se pretende justificar el incumplimiento de las obligaciones de pago que corresponden a la demandada, y que como tal se habría apropiado indebidamente de los materiales que le fueron suministrados por Ecaval, perjuicio moral que estima en \$200.000.000.

Pide se declare que la demandada ha incumplido el contrato que la unía con su representada, y en definitiva, se la condene a indemnizar la suma de \$39.848.340 por concepto de daño emergente, \$150.000.000 por concepto de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GGKBXCPJXC

«RIT»

Foja: 1

lucro cesante, y \$200.000.000 por concepto de daño moral, o la suma que el Tribunal estimare pertinente, más reajustes, intereses y costas.

Con fecha 24 de junio de 2022 se notifica la demanda.

Con fecha 20 de julio de 2022 se tiene por contestada la demanda, en rebeldía.

Con fecha 21 de julio de 2022 la actora evacua la réplica, sin incorporar antecedentes nuevos.

Con fecha 1 de agosto de 2022 se tiene por evacuada la dúplica, en rebeldía.

Con fecha 24 de agosto de 2022 se llama a las partes a conciliación, sin éxito, y se recibe la causa a prueba.

Con fecha 25 de octubre de 2022 comparece la parte demandada y alega la anómala de prescripción, que sustenta en la disposición del artículo 822 del Código Comercio, acudiendo en subsidio a la regla general del Código Civil, en atención al tiempo transcurrido desde los meses de mayo y julio de 2017, cuando la deuda se hizo exigible.

Con fecha 1 de noviembre de 2022 la parte demandante se pronuncia, enfatizando que solo a partir de la emisión de las facturas correspondientes, Ecaval podía hacer exigible a consorcio FCC el cumplimiento de su obligación contractual consistente en pagar el precio por concepto de los materiales áridos entregados. Por tanto, entiende que solo con fecha 9 de agosto de 2018, cuando Ecaval emite la factura electrónica N° 9919, por un valor total de \$39.848.340, con el propósito de hacer exigible el pago de los saldos pendientes correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 2017, es que devino en exigible la obligación, toda vez que con anterioridad a ello su cobro resultaba improcedente, por las discrepancias respecto de la cantidad de material.

Con fecha 20 de diciembre de 2022 se cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I. EN CUANTO A LA TACHA.

PRIMERO: Que la parte demandante alega la inhabilidad relativa del testigo Mauricio Alejandro Boggen Valencia, por las causales del artículo 358 N° 5 y 6 del Código de Procedimiento Civil, por ser dependiente de la parte que lo presenta, con una relación de larga data, aduciendo que el interés que reprocha la figura puede no ser económico.

Por su lado, la demandada plantea que el deponente, por sus conocimientos técnicos y calidad profesional es quien mejor puede explicar los hechos del presente juicio, habiendo participado en el desarrollo del proyecto, destacando que hoy en día no habría presión sobre los trabajadores en virtud de la protección que les confiere la ley laboral y el procedimiento de tutela.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GGKBXCPJXC

«RIT»

Foja: 1

SEGUNDO: Que el declarante ha reconocido directamente ser empleado de la parte demandada en la actualidad, razón suficiente para acoger la primera de las causales que se hacen valer, cuya vigencia no está en duda.

Cabe agregar que el procedimiento de tutela laboral –descrito en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo- dice relación con “las represalias ejercidas en contra de trabajadores por el ejercicio de acciones judiciales, por su participación en ellas como testigo o haber sido ofrecidos en tal calidad, o bien como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo”. Vale decir, se refiere al foro laboral, para proteger a los trabajadores que demandan a sus empleadores, así como a los trabajadores que sirven de testigos en juicios laborales en contra de sus empleadores, no siendo el caso de autos.

Por último, no consta de alguna forma el interés representado, que sí requiere un contenido patrimonial, como tradicionalmente se ha entendido.

Así pues, se acogerá la primera tacha y se rechazará la segunda, ante lo cual se privará de peso probatorio a los dichos del deponente.

II.EN CUANTO AL FONDO.

TERCERO: Que a falta de contestación de la parte demandada, se entiende que ha negado todos y cada uno de los fundamentos de hecho contenidos en la demanda.

“En nuestro derecho, la rebeldía importa una contestación ficta de la demanda, en el sentido de entender que el demandado ha negado todos los supuestos de hecho y de derecho en que se funda la pretensión hecha valer por el actor en su demanda, y consecuentemente recaerá en plenitud en el demandante soportar la carga de la prueba durante el proceso. Al efecto se ha señalado que la rebeldía del demandado o la contestación ficta de la demanda implica negación total y absoluta de los hechos contenidos en la demanda” (Procedimiento Civil. Juicio Ordinario de Mayor Cuantía. Séptima Edición. Ignacio Rodríguez Papic. Ed. Jurídica de Chile. Revisado y Actualizada por el profesor Cristián Maturana Miquel, página 75, citando a don Mario Casarino V. en su Manual de Derecho Procesal Civil, tomo IV Pag. 52. 3ª Edición. 1947 de la misma Editorial).

CUARTO: Que, por tanto, recayendo el peso de la prueba en la parte demandante, en relación a la existencia y exigibilidad de la obligación en que cimenta su pretensión, e deja constancia del hecho de haber acompañado al juicio los siguientes documentos:

a) Copia de factura electrónica N° 9919, emitida el 9 de agosto de 2018 por Sociedad Comercial y de Transportes Ecaval Limitada a Consorcio FCC Construcción Ferrovial Agroman Limitada, por un total de \$39.848.340, por los siguientes rubros: i) saldo pendiente de despacho mes de mayo 2017, total 3690 m3, por \$17.009.500; ii) saldo pendiente de despacho mes de junio 2017, total 2958 m3, por \$13.172.000; y, iii) saldo pendiente de despacho mes de julio 2017, total 686 m3, por \$3.304.500. Sin constancia de recibo.

b) Copia de correos electrónicos intercambiados entre Braulio Cordero (Ecaval) y Fuad Kassis (Ferrovial), en los meses de junio y agosto del 2017. Entre



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GGKBXCPJXY

Foja: 1

éstos se encuentra el correo de fecha 1 de junio de 2017, en que el sr. Kassis manifiesta al sr. Cordero que debido a las continuas diferencias que cada mes tenemos entre las guías que llegan a nuestras oficinas y las que Ustedes nos entregan, es que me es imposible seguir cancelando la diferencia de éstas, debido a los siguientes acontecimientos. En cada punto de descarga existe un supervisor o persona a cargo de retirar el vale del camión que llega. A las empresas transportistas se les paga por viaje realizado. Por lo que cada vale es el único documento válido para que puedan cobrar. Las empresas transportistas no reflejan los volúmenes que Ustedes me entregan. Nuestra topografía realiza mes a mes un informe topográfico de lo realizado en el periodo. Mostrando discrepancias enormes con los volúmenes que Ustedes me representan en las guías de despacho (...). A esta comunicación contesta el sr. Cordero el mismo día, indicando que "(...) todas las entregas que nosotros hacemos en la planta de áridos son personal que Uds. envían a retirar, desde el momento que salen de ahí, en adelante la responsabilidad no es nuestra donde les indican dejar el material (...)". Asimismo, en un segundo correo de esa fecha, el sr. Cordero agrega que: "(...) instruí a las personas que emiten las guías de despacho, exigir a los conductores nombre y rut al momento que retiren material en nuestra planta con el objeto de que puedan determinar en su revisión semanal dónde fue entregado este material y a qué persona en la obra (...)".

Por último, el 7 de agosto de 2017 el sr. Kassis avisa del procedimiento que se seguirá, en relación a los camiones y las guías. Asimismo, se refiere a la "última factura rechazada" por un monto neto de \$74.133.000, apuntando a descuentos que debieran hacerse en lo cobrado por los periodos "mayo-junio" y "junio-julio", por un total de \$41.679.500, solicitando una nota de crédito.

QUINTO: Que, por su lado, la parte demandada presenta el testimonio de Alex Andrés Fierro Vivanco, quien señala que le tocaba ver "facturas" en Ferrovial, entre 2015 y 2018, explicando que entre Ecaval y el Consorcio "había órdenes de compra por venta de áridos", indicando que "ellos nos hacían llegar el material con guías de despacho, las cuales eran recibidas por el personal autorizado en terreno, ellos firmaban las guías de despacho". Agrega que "nosotros revisábamos que en las facturas vinieran detalladas las guías, que estuvieran todas debidamente firmadas y de acuerdo a eso se cancelaba la factura. Si había alguna discrepancia por alguna guía que se extraviara en terreno o no apareciera o apareciera sin firma se le solicitaba a Ecaval una copia debidamente firmada".

SEXTO: Que, así las cosas, corresponde valorar las probanzas rendidas por las partes, comenzando por los instrumentos. En este sentido, no se registran impugnaciones fundadas en causal legal y acogidas respecto de ninguno de los que fueron puestos en conocimiento de la contraria, ni alegaciones respecto de las virtudes formales de los públicos. En consecuencia, se reconoce a los instrumentos señalados el valor probatorio que la propia Ley les atribuye, según su naturaleza.

Por tanto, las comunicaciones electrónicas entre las partes serán valoradas como instrumentos públicos en juicio, y en tal sentido hacen plena prueba de su existencia.



Foja: 1

No ocurre lo mismo con la factura, en tanto emitida por la misma parte que la presenta. En efecto, el instrumento privado que no aparece firmado, expedido o recibido por la persona contra la cual se opone, carece de relevancia jurídica, puesto que no está amparado por la presunción de autenticidad propia de los públicos.

Por último, el testimonio de Alex Andrés Fierro Vivanco, presentado por la parte demandada, impresionó como imparcial y verídico. En efecto, la imparcialidad es una característica en el testigo que dice relación con su neutralidad o falta de designio anticipado en favor o en contra de alguien. En ausencia de imparcialidad el testigo no puede ser considerado fidedigno, es decir, digno de fe, creíble. Pero no solo basta que el deponente sea imparcial para ser fidedigno, pues es preciso que, además, su relato sea verídico, es decir, que en el mismo se diga verdad, entendida ésta, sin entrar en espesuras filosóficas, como la correspondencia entre la representación mental de la realidad en el sujeto con los hechos que describe. Ahora bien, la manera más segura de conocer si el testigo dice verdad en el proceso civil es contrastar críticamente la expresión de su representación mental de la realidad con la demás prueba rendida en autos. Si es concordante, puede afirmarse que su relato es verídico. Si, por el contrario, es inconsistente con el resto de la prueba, puede concluirse que su declaración no es verídica.

En la especie, los elementos de confrontación con que se cuenta – básicamente las impresiones de correos- dan cuenta de un procedimiento similar al que se describe en la demanda, para rodear de mejores seguridades la cantidad de material que era retirada, transportada y finalmente recibida por la demandada.

Con todo y por sí sola, la versión en paráfrasis no alcanza para constituir una presunción judicial, en tanto se requiere -por regla general- que sean graves, precisas y concordantes, en plural, salvo que tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes, no siendo el caso, por tratarse simplemente de una visión general del procedimiento referido, que muy poco aporta para el esclarecimiento de la problemática particular.

SEPTIMO: Que, de esta manera, se demostró que las partes sostuvieron una relación comercial, vigente durante 2017, en cuyo mérito la actora suministraba áridos a la demandada, y que surgieron diferencias respecto de la cantidad exacta de áridos entregados por Ecaval a los transportistas, atendido que el material que llegaba a destino habría sido inferior al documentado en las guías de despacho.

OCTAVO: Que el análisis de los elementos de hecho y, en particular, de la impresión del correo de fecha 7 de agosto de 2017, descrito más arriba, lleva a concluir que ciertamente existe una disputa en torno a si corresponde o no pagar el monto que la demandada plantea -en esa comunicación- se debe descontar, por medio de una nota de crédito.

Es conveniente recordar que tal controversia en los montos gira en torno a la diferencia que habría entre lo despachado y lo recibido, en relación a la cantidad de material, atendido que la demandada -conforme se desprende de los correos- acusa que sería inferior, en su perjuicio, razón por la que realizó los descuentos



«RIT»

Foja: 1

que la actora pretende recuperar con la factura N° 9919 de fecha 9 de agosto de 2018.

Pues bien, correspondía entonces a la demandante demostrar que efectivamente despachó el total del material comprometido, que se ignora cuánto es, así como su precio, en relación a lo cobrado y lo pagado.

Por consiguiente, dado que no se cuenta con esta información, no es posible revisar si el saldo cobrado tiene asidero o no, razón suficiente para rechazar la demanda.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, para el caso solo hipotético de haberse tenido por acreditada la obligación, la demanda no habría tenido mejor suerte, por haber operado la prescripción especial alegada por la parte demandada (folio 33).

Al respecto, no cabe duda de que las indemnizaciones requeridas dicen relación con supuestos incumplimientos verificados entre mayo y julio de 2017, en el marco de una relación comercial entre las partes. Por tanto, recibe aplicación la norma del artículo 822 del Código de Comercio, que señala que las acciones referidas a obligaciones mercantiles prescriben en 4 años, transcurriendo hasta la notificación de autos (24 de junio de 2022) un término superior.

En efecto, se ha dicho que el artículo 822 del Código de Comercio hace las veces de “bolsón”, en la medida que apunta a las obligaciones del Libro II que no tienen señalado un plazo especial de prescripción.

Tampoco cabe poner en duda que la de autos es una obligación mercantil, en tanto obedecía a las operaciones de compraventas señaladas en la demanda, en el contexto de una relación comercial de suministro de áridos, acorde con el giro de las partes, en línea con lo prevenido en el numeral 1 del artículo 3° del Código de Comercio.

Asimismo, no puede ponerse en cuestión la plausibilidad del axioma que consagra el artículo 7 del Código Civil, en cuanto a la primacía de la regla especial por sobre la general.

Por último, la defensa de la actora en orden a que debería considerarse como punto de partida la fecha de la factura electrónica N° 9919 (9 de agosto de 2018), porque con ella se hizo exigible el saldo supuestamente adeudado, implicaría desconocer la realidad de la relación comercial y dejar entregado a la vendedora la determinación de unos saldos correlativos a la impugnación de la compradora, lo que no se puede aceptar en este caso, máxime cuando esta sentencia no consiguió establecer su existencia y, en todo caso, su monto.

DECIMO: Que no se impondrá las costas a la parte demandante, por estimarse que litigó con motivo plausible.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1437, 1545 y siguientes, 1698 y siguientes, 1793, 2503 y 2518 del Código Civil; 3° N° 1 y 822 del Código de Comercio; y, 144, 170, 342, 346 N° 3, 358 N° 5 y 6, 384 N° 1 y 426 del Código de Procedimiento Civil, se declara:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GGKBXCPJXCY

«RIT»

Foja: 1

- I. Que se acoge la tacha alegada en contra del testigo Mauricio Alejandro Boggen Valencia, por la causal del artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, desestimándose la sexta.
- II. Que se rechaza la demanda en todas sus partes.
- III. Que no se condena en costas.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Rol C-8272-2021

Dictada por don Matias Franulic Gomez, Juez Titular del Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiséis de Diciembre de dos mil veintidós**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GGKBXCPJXY